
Revista Gestión y Desarrollo Libre, Año 4 N° 8, 2019. p.p. 65 - 93
ISSN 2539-3669
Universidad Libre Seccional Cúcuta, Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables y Centro Seccional de Investigaciones
Cartografía del conflicto armado en Norte de Santander 1988–2012: análisis
descriptivo de las modalidades de violencia
Mario de Jesús Zambrano Miranda
Chanbelayn Pinzón Solano
Marcela Pontón Álvarez

Cartografía del conflicto armado en Norte de Santander 1988–2012: análisis descriptivo de las modalidades de violencia *

Mapping of armed conflict in North Santander 1988–2012:
Descriptive analysis of violence modalities

Recibido: Noviembre 04 de 2018 - Evaluado: Febrero 06 de 2019 - Aceptado: Mayo 08 de 2019

Mario de Jesús Zambrano Miranda **
Chanbelayn Pinzón Solano ***
Marcela Pontón Álvarez ****

Para citar este artículo / To cite this Article

Zambrano Miranda, M. d. J., Pinzón Solano, C., & Pontón Álvarez, M. (Julio-Diciembre de 2019). Cartografía del conflicto armado en Norte de Santander 1988–2012: análisis descriptivo de las modalidades de violencia. *Revista Gestión y Desarrollo Libre*, 4(8), (65-93).

Resumen

El conflicto armado ha impactado el departamento Norte de Santander con diversas formas de violencia, las cuales son usadas como herramientas según los intereses particulares de los grupos armados ilegales presentes en el territorio que fungen como

* Artículo inédito. Artículo de investigación e innovación. Artículo de investigación. Proyecto de investigación vinculado al semillero de investigación Crecimiento Económico y Desarrollo Territorial (CEDT).

** Economista, Magister en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Externado de Colombia, Docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Email: mario.zambrano@gmail.com.

*** Licenciado en Administración Pública Territorial por la Escuela Superior de Administración Pública, Grupo de investigación Crecimiento Económico y Desarrollo Territorial (CEDT), Investigador Junior de la Escuela Superior de Administración Pública. Email: chanberlayn@outlook.es.

**** Licenciada en Administración Pública Territorial por la Escuela Superior de Administración Pública, Grupo de investigación Crecimiento Económico y Desarrollo Territorial (CEDT), Investigador Junior de la Escuela Superior de Administración Pública. Email: danamaros1110@hotmail.com.

actores estatales en ausencia del Estado. El presente estudio desmenuza esa realidad en diferentes grados de intensidad durante el periodo 1988 al 2012. Utilizando una cartográfica temática mediante el uso de software ARCGIS que demuestra la dinámica del conflicto armado sobre el territorio, se mismo es evidente la concentración de acciones violentas en los municipios ubicados al norte sobre la línea fronteriza, siendo el narcotráfico el elemento que cohesiona los hechos violentos sobre el territorio, cultivos de coca y ubicación geográfica son dos de las variables que explican el círculo de violencia en estos municipios de Norte de Santander

Palabras Clave: Cartografía, Territorio, Conflicto Armado, gobernabilidad

Abstract

The armed conflict has impacted Norte de Santander with several forms of violence, which are used as tools according to the particular interests of the illegal armed groups present in the territory that serve as state actors in the absence of the state. This study breaks down this reality into different degrees of intensity during the period 1988 to 2012. Using a thematic mapping using ARCGIS software that demonstrates the dynamics of the armed conflict over the territory, it is also evident that violent actions are concentrated in the municipalities located north of the border, drug trafficking being the element that unites the violent acts on the territory, coca crops and geographical location are two of the variables that explain the circle of violence in these municipalities of Norte de Santander

Key words: Cartography, Territory, Armed Conflict, Governance

SUMARIO

INTRODUCCIÓN. - ESQUEMA DE RESOLUCIÓN. - I. Problema de investigación. - II. Metodología. - III. Plan de redacción. - 1. Conflicto armado. - 2. Resultados de investigación. - 2.1 Ataques a Poblaciones (AP). - 2.2 Daño a Bienes Civiles (DBC). - 2.3 Asesinatos Selectivos (MSEL). - 2.4 Secuestro (SEC). - 2.5 atentados Terroristas (AT). - 2.6 Minas Antipersona (MAP). - 2.7 Masacre (MAS). - CONCLUSIONES. - REFERENCIAS.

Introducción

Según Posada (1968) El fenómeno de la violencia en Colombia es una de las más terribles realidades en la historia de América Latina. Terrible por el desgaste humano y huella sangrienta que ha dejado; por sus efectos claramente negativos sobre

la economía nacional; por sus impactos/en la moral y en las costumbres de algunos sectores de la población. La geografía de la violencia no cubre homogéneamente, ni con igual intensidad el territorio de Colombia. La estrategia territorial de los actores ilegales está determinada por las condiciones geoeconómicas, dada la presencia de cultivos de coca y recursos naturales; además, de corredores estratégicos debido a la facilidad de movilidad en la región y hacia afuera (Salazar, 2010). Todo ello explica en buena medida la expansión, intensificación y prolongación del conflicto en determinadas zonas del país; asimismo, la conjunción de elementos como la desigualdad, la pobreza, la ausencia del Estado, instituciones corruptas, falta de gobernabilidad (Yaffe, 2011) y la inequitativa distribución de los activos rurales es un problema histórico y estructural, que antecede e incluso explica los orígenes del conflicto armado (Uribe Kaffure, 2014).

La espacialidad del conflicto enclava a los actores ilegales en la periferia lejos de los centros económicos y políticos del país (Ríos sierra, 2016), donde las condiciones selváticas, montañosas, fronterizas, la ausencia del Estado, la presencia de guerrilla y paramilitarismo, o la concurrencia de fuentes de poder económico, como el cultivo ilícito y el narcotráfico, sirven de escenario óptimo para persistir en una guerra de guerrillas. Departamentos como Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander concentran hasta dos terceras partes del total de cultivos de coca y sus indicadores socioeconómicos presentan un mayor rezago con respecto al resto del país. “Un efecto del conflicto armado que se ha agudizado desde el inicio del Plan Colombia es el desplazamiento forzado interno y transfronterizo, el cual representa la mayor manifestación de la crisis humanitaria en el país” (López, 2007: 141). Lo anterior explica que, la condición de periferia de dichos departamentos va más allá de una cuestión geográfica y fronteriza. Considera la dimensión de violencia estructural, en términos de esta violencia, los departamentos referidos se encuentran atrasados en materia de calidad de vida, desarrollo humano, necesidades básicas insatisfechas, ingresos económicos y desempleo, lo cual permite albergar la hipótesis de un escenario con: una institucionalidad más débil, por un lado, y por otro, con menores capacidades para combatir la violencia directa derivada de la presencia de los grupos armados. “Una sociedad en crisis muestra por lo general signos de desintegración. En la medida en que el estado constituye el principal factor articulador de la sociedad, esos signos de ruptura cuestionan su capacidad para desempeñar este fundamental papel integrador” (Oszlack, 1992: 6).

Para el año 2013, los indicadores socioeconómicos de los departamentos periféricos sustentan la tesis antes expuesta; la incidencia de la pobreza en estos

departamentos alcanza casi el 47,00%, mientras la media nacional se sitúa en 38,40%; igualmente, la tasa de desempleo es 1,50 puntos superior en estas regiones del país y las necesidades básicas insatisfechas superan el 58,00% cuando la media nacional se situaba en 53,51%. Adicionalmente, existe un patrón espacial de relación entre las áreas de siembra de coca y el accionar armado de los grupos irregulares, evidenciando una alta relación entre incremento del conflicto y siembra de coca. Para el 2002 y el año 2009 en las regiones con cultivos ilícitos la intensidad de confrontación armada estaba entre 10 y 50 acciones bélicas (Salazar, 2010). La expansión de los cultivos de coca se debe al conflicto armado, al mismo tiempo que el narcotráfico se constituye en catalizador del conflicto.

Lo anterior ha sido catalogado como uno de los problemas que pueden causar violencia y crimen, pero también representan un obstáculo al desarrollo de las regiones. Como lo menciona Rodríguez & Zambrano (2014: 100) para el caso de Norte de Santander, “la ineficiencia de las instituciones del Estado, juegan un papel importante en el bajo desarrollo económico de la región porque ocasiona mayores niveles de violencia e inseguridad, generando incertidumbre, que a su vez afecta el intercambio y el acceso a tecnologías y mercados más grandes, y benéfica a los grupos de mayor poder en el sector, que en últimas vulneran al pequeño productor”. Las condiciones de los territorios y vida de los habitantes permiten indagar sobre la clase de relaciones sociales entre los mismos, por ello el presente artículo pretende hacer un análisis más a fondo, ya que la violencia y los problemas de orden público también están relacionados con el atraso de algunas regiones (ley 12 de 1986). Finalmente, el escrito se divide en cinco partes, comenzando por esta introducción, seguido por el plan de redacción, metodología, análisis de resultados y conclusiones.

Esquema de resolución

1. Problema de investigación

¿Cuál ha sido la dinámica del conflicto armado en Norte de Santander 1988–2012?

2. Metodología

Con un enfoque cuantitativo se realizó un estudio descriptivo donde las interacciones entre el hombre y el territorio constituyen un conjunto de relaciones referenciadas espacialmente desde el campo de la geografía, disciplina que analiza estas interacciones (Rivera Pabón, 2006). Dicho análisis es posible con el uso de la

cartografía temática, herramienta que permite asociar fenómenos sociales al espacio posibilitando una simple pero definitiva síntesis de la realidad.

3. Plan de redacción

3.1. Conflicto armado

América latina ha sido uno de los continentes de mayor preocupación en este tema, como lo demostró el Igarapé Institute (2016) siendo la zona con más homicidios en el mundo con una mayor participación por parte de Centroamérica. Según Chabat (2010: 7):

En América Latina destacan los cárteles de la droga mexicanos, los cuales se han modificado y recompuesto en los últimos años. Varias de estas organizaciones criminales tienen presencia en el resto de Latinoamérica y han hecho alianzas con otros grupos criminales en Colombia y Europa para la distribución de drogas. En América Latina subsisten los cárteles colombianos, los cuales, si bien se han atomizado, siguen produciendo la mayor cantidad de cocaína que circula en el mundo, así como algunas mafias desarrolladas en las rutas de la droga hacia el mercado estadounidense, tales como los “yardees” jamaíquinos.

Colombia desde la época de la conquista hasta finales del siglo XX, se ha caracterizado por tener múltiples eventos de violencia, situando al país en el podio de criminalidad y disuasión a nivel internacional, que en el año 2016 ocupó el puesto 12 entre los países con mayor índice de criminalidad a nivel mundial (BBC, 2016). El crimen en Colombia, entendido como homicidios, hurtos, delitos sexuales, amenazas y terrorismo, ha sido una constante histórica que se ha transformado a lo largo de los años y ha afectado la interacción de los habitantes a partir de factores sociodemográficos, económicos, geográficos e institucionales.

Así las cosas, aunque la violencia se presente en todo el suelo colombiano, no es esquiva a las desigualdades de los territorios. Debido a lo anterior es importante ahondar en los diferentes espacios geográficos y territorios del país donde son más evidentes las desigualdades económicas y sociales como pasa en las zonas fronterizas. Por ello Hernández (2016: 13) plantea tres colombias como resultado de un sistema político desigual, “una urbana institucionalizada e integrada, una Colombia semiurbana y semiintegrada y una tercera rural, pobre, básicamente sin Estado y muy desintegrada del resto del país.”

El conflicto armado propicia la gran concentración de fuerza laboral poco calificada y en condiciones de miseria en los municipios que son centros de acopio de actividad económica en el país; todo esto a través del fenómeno del desplazamiento forzado. Sumado a lo anterior, las estadísticas demográficas suministradas el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) exponen que, en promedio, la tasa de crecimiento de la población en el país fue de 1,8% para el periodo 1985 a 1991, sin embargo, a partir de 1992, de acuerdo con la información, los departamentos y municipios comenzaron a crecer, esto a una tasa promedio 34,30% mayor que antes, dado lo anterior, es preciso señalar que, la mayor densidad demográfica puede deberse a cuestiones que difieren del movimiento natural de la población, tales como el proceso de descentralización adoptada por el gobierno nacional a inicios de los 90.

“Las ciudades en Colombia han tenido que recibir grandes cantidades de población que han llegado a saturar mercados laborales estrechos, que no están en capacidad de absorber esta mano de obra. Como consecuencia, los mercados informales han crecido, la inseguridad ha aumentado y algunos servicios de los sistemas sociales han colapsado” (Miranda et al., 2016: 24). Esta última variable prima de igual manera para el trabajo de López & García (1999) argumentando que más que la pobreza es la desigualdad la causa de la violencia. De manera que, esta se propaga más rápidamente donde el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Contrario al enfoque de las causas por falta de necesidades satisfechas, repunta el trabajo de Rubio (1999) el cual argumenta que no es favorable pensar en la violencia como un acto generado por individuos presionados a delinquir por sus necesidades insatisfechas pues “las mayores tasas de criminalidad están presentes en las ciudades más desarrolladas a manos de individuos con mayor acceso a la educación y al empleo, y en los municipios donde confluyen las organizaciones ilegales armadas, (guerrilla, paramilitares, narcotráfico)” (Sánchez Torres & Núñez, 2001: 95).

Como lo menciona Posada (1987: 30) “La consecuencia más notable de los procesos de violencia es la expulsión del campesinado y la concentración de la propiedad rural. A su vez, el hambre de tierras y recursos productivos del campesinado se expresa en movimientos dirigidos a la invasión de haciendas, en corrientes migratorias hacia frentes de colonización, en marchas campesinas por servicios públicos y en diversas formas de relación con movimientos armados revolucionarios o clientelas armadas de propietarios y narcotraficantes.” Finalmente, en lo institucional, el Gobierno nacional ha intentado mediante el uso de políticas, garantizar una mayor seguridad ciudadana a través de la Dirección de Política

Criminal y Penitenciaria en 2008, la cual fue delegada como la dependencia encargada del diseño, formulación y evaluación de las políticas públicas del crimen, la implementación de la Constitución del 91, o de los innumerables diálogos entre el Ministerio de Justicia y las dependencias de Derecho para la vinculación de los criminales a la sociedad.

De modo que, si bien la serie de condiciones institucionales y políticas mencionadas anteriormente pudieron mejorar el comportamiento regional y nacional del conflicto, parece indicar que, más que erradicar la violencia, se obtuvo como consecuencia de este proceso, un cambio estructural que pudo alterar la dinámica criminal en el país, y por ende en cada una de las regiones del mismo. “Los grupos armados persiguen diversos objetivos de guerra al atacar a la población civil. La extensión del dominio territorial, con el ataque y el control de las poblaciones, es importante, ya sea por el atractivo económico que ofrece la región o por su contribución para ejercer hegemonía en el territorio.” (Miranda et al., 2016: 25). Según Contreras (2003) una primera aproximación a las causas del conflicto lleva a distinguir las objetivas de las subjetivas, estas últimas se explican más por la voluntad política de los actores en conflicto que por las circunstancias de orden social, económicas o político que constituirían las primeras. Como la voluntad política de los actores no surge de la nada, es bastante discutible que pueda presentarse una tajante separación entre estas causas. Partiendo de esa premisa, y teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, se formula el siguiente cuestionamiento ¿Cómo la presencia de cultivos ilícitos en el territorio y la condición de frontera incide en las dinámicas del conflicto armado en Norte de Santander durante el periodo 1988-2012?

Para finales del siglo XX, la economía del crimen había tomado una importante posición en los debates a nivel mundial, producto del mayor interés por comprender los actos delincuenciales que repercuten negativamente en el desenvolvimiento de la economía. Este nuevo campo de investigación de la ciencia económica fue adoptado prontamente dada la escasa capacidad institucional de los Estados que impedía atender de manera adecuada este fenómeno, cuyo resultado fue el enfrentamiento armado que inundó la primera mitad del siglo y casi tres cuartos del mismo a causa de la reconstrucción de las naciones. Paralelamente, en Colombia desde “mediados del siglo XX hasta la actualidad, se puede apreciar claramente que distintas visiones y tipos de violencia se entrecruzan constantemente, repeliéndose en unos casos (estatal/ contraestatal), conviviendo en otros (estatal/paraestatal), y mutando y en algunos casos generando nuevas violencias (narcotráfico, narcoestatal,

narcoparamilitar, narcoguerrillera)” (Trejos, 2012: 35) y la “La persistencia de la violencia en Colombia, que se da a pesar de haber sido superada en periodos determinados, a través de pactos políticos y sociales, se explica porque el sistema político ha excluido a amplias capas de la población, al tiempo que los grupos de intereses particulares se han apropiado de los bienes públicos y han marginado de los servicios sociales a la mayor parte de la población” (Martínez, 2001: 176).

La determinación del conflicto en Colombia, como una medida para analizar la aparente relación con las condiciones del territorio, de la vida de los habitantes, y de las instituciones, que en conjunto se desenvuelven mediante las relaciones sociales, se hace necesaria para identificar los elementos que componen la interacción social del país y su nexa con la violencia. Mas en regiones donde el Estado lleva medio siglo de espaldas a todos los problemas sociales y económicos que aún persisten en la zona y no han consolidado un orden político, social, económico y jurídico debido a la continua violencia generada por los actores armados ilegales. Esto hace de la presente investigación de vital importancia a la hora de indagar en el fenómeno criminal, con el fin de proveer un aporte a la literatura frente al tema para el mayor conocimiento y comprensión de este. Según Ávila et al. (2013: 21) “las dinámicas de ilegalidad y el crimen en la zona de frontera no son homogéneas, y al estudiarlas es necesario desprenderse de prejuicios y posiciones extremistas, más bien, al ser zona de frontera las situaciones son grises y las interrelaciones entre legalidad e ilegalidad no se pueden enmarcar en análisis totalizantes.”

3.2. Resultados de investigación

El conflicto armado ha impactado el departamento Norte de Santander con diversas formas de violencia, las cuales son usadas como herramientas según los intereses particulares de los grupos armados ilegales, representados por guerrillas y paramilitares que fungen como actores estatales en ausencia del Estado sobre un amplio territorio, con un accionar en diferentes grados de intensidad que durante el periodo 1988 al 2012 generaron 4013 acciones violentas en siete formas particulares de violencia (tabla 1).

Tabla 1. Definición de las acciones de violencia

	ATAQUES A POBLACIONES (AP): “Incursión que implica la ocupación transitoria de un territorio para la realización de una acción militar con un objetivo militar identificado dentro del casco urbano” (Carreño Barreto, 2016, p. 49).
	DAÑO A BIENES CIVILES (DBC): “Daños causados a bienes materiales públicos y privados que no son objetivos militares” (Carreño Barreto, 2016).
	ASESINATOS SELECTIVOS (MSEL): “Acción de quitar la vida a una persona seleccionada de una comunidad en la cual el actor armado tiene influencia y con dicha acción busca socavar el tejido social que se oponga a sus intereses. En dicha acción de una (1) a tres (3) pierden la vida, además de ser una modalidad de violencia también ejecutada por la fuerza pública en las ejecuciones extrajudiciales. Dichas acciones no son publicitadas por los grupos armados que las realizan dado que la intención es invisibilizar la violencia” (Carreño Barreto, 2016, p. 49).
	SECUESTRO (SEC): “Situación en la cual una persona es privada ilegalmente de su libertad contra de su voluntad para obtener un beneficio a cambio de su liberación o con su retención” (Carreño Barreto, 2016).
	ATENTADOS TERRORISTAS (AT): “Ataque indiscriminado realizado con explosivos en escenarios públicos y civiles con un alto poder de destrucción” (Carreño Barreto, 2016, p. 48).
	MINAS ANTIPERSONA (MAP): Explosivo que detona por proximidad y contacto mas no media un dispositivo electrónico que genere una selección de víctimas al momento de explotar tiene el potencial de matar, aunque generalmente causa la incapacidad permanente por pérdida de miembros inferiores de una persona o grupo de personas. Existe la variación de los Artefactos Explosivos Improvisados AEI que por su inestabilidad y componentes suponen un mayor peligro” (Carreño Barreto, 2016).
	MASACRES (MAS): “Acción de quitar la vida a más de tres (3) personas ubicadas en un mismo lugar bajo las mismas condiciones de modo tiempo y lugar seleccionadas de una comunidad en la cual el actor armado tiene influencia dicha acción es publicitada como muestra de poder ante la ausencia legítima del Estado que deja la población totalmente desprotegida” (Carreño Barreto, R. 2016, p. 48).

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Capital Social y Conflicto Armado: una indagación en diferentes municipios de Colombia sobre la resiliencia social ante la violencia. Disponible en <http://bdigital.unal.edu.co/56146/1/1032439957.2017.pdf>.

3.2.1. Ataques a Poblaciones (AP)

Los Ataques a Poblaciones (AP) suman 54 acciones para el periodo 1988-2012, las cuales son ejecutadas en un 100,00% por grupos guerrilleros, con la guerrilla del ELN ejecuto 21 AP que equivalen al 38,89% de las acciones seguida de la guerrilla de las FARC con 18 AP que corresponden al 33,33% de las acciones, destaca que al sumar las acciones de la guerrilla del ELN y las FARC individualmente y en conjunto dado que estos grupos guerrilleros se apoyaron en la realización de los AP además de participar en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar (CGSB) la cifra resultante es de 51 AP, que equivalen al 94,44 % de las acciones (tabla 2).

Según (Montenegro, 2016, p. 8) “El fortalecimiento del control territorial y militar por parte de las FARC, ya que se ha afirmado que fueron estos quienes introdujeron la semilla de coca en la región con fines económicos (Pérez, 2006).

Esto confluyó con condiciones de rentabilidad del negocio del narcotráfico a finales de la década de los noventa. De igual forma, las condiciones de pobreza y las escasas oportunidades de los cultivos de “pan coger”, empujaron al campesinado a optar por el cultivo de coca para mejorar sus niveles de vida.”

Tabla 2. Acciones de AP por actor armado 1988-2012

ACTOR ARMADO	ATAQUES A POBLACIONES			
	ACCIONES	%	VICTIMAS FATALES	%
GUERRILLA NO IDENTIFICADA	1	1,85		
GUERRILLA-CGSB	9	16,67	9	11,25
GUERRILLA-ELN	21	38,89	33	41,25
GUERRILLA-ELN Y EPL	1	1,85	1	1,25
GUERRILLA-EPL	1	1,85		
GUERRILLA-FARC	18	33,33	16	20,00
GUERRILLA-FARC Y ELN	3	5,56	21	26,25
TOTAL	54	100,00	80	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los años más violentos en cuanto a AP en el Departamento Norte de Santander durante el periodo 1988-2012 corresponden a los años de 1991 y 1999 con 9 AP correspondientes al 16,67% de las acciones para cada año respectivamente, así mismo el periodo más violento transcurre desde 1988 a 1999 tiempo que corresponde con la llegada de los paramilitares con el bloque Catatumbo al departamento lo que explica la disminución AP (tabla 3). Paralelo a esto, Cortés (2012) demuestra el aumento de los cultivos ilícitos debido a la situación económica del país. “la forma de producción campesina recibe un fuerte golpe con las políticas de apertura económica neoliberal impulsadas por el gobierno de César Gaviria Trujillo. La entrada de productos agrícolas subsidiados provenientes especialmente de Estados Unidos quebró a muchos campesinos, que se vieron obligados a bajar los precios de sus productos incluso por debajo de los costos de producción para poder competir en el mercado interno” (Cortés, 2012: 140).

Tabla 3. Acciones de AP en el periodo 1988-2012

AÑO	ATAQUES POBLACIONALES	
	No.	%
	54	
1988	2	3,70
1989	3	5,56
1990	5	9,26
1991	9	16,67
1992	2	3,70
1993	0	0,00
1994	3	5,56
1995	0	0,00
1996	1	1,85
1997	5	9,26
1998	6	11,11
1999	9	16,67
2000	1	1,85
2001	1	1,85
2002	1	1,85
2003	2	3,70
2004	1	1,85
2005	0	0,00
2006	0	0,00
2007	0	0,00
2008	0	0,00
2009	2	3,70
2010	0	0,00
2011	0	0,00
2012	1	1,85

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>.

3.2.2. Daño a Bienes Civiles (DBC)

El comportamiento de las cifras en cuanto a Daños a Bienes Civiles (DBC). Durante el periodo 1988-2012 se realizaron 379 acciones de DBC las cuales tuvieron

un mayor grado de intensidad durante la década de los años 90, con su punto más álgido en el año 1991 con 44 acciones que equivalen al 11,61 % del total, hasta el año 2002 con 23 acciones que equivalen 6,07% del total (tabla 4).

Tabla 4. Acciones de DBC en el periodo 1988-2012

AÑO	DAÑOS A BIENES CIVILES	
	No.	%
1988	5	1,32
1989	13	3,43
1990	11	2,90
1991	44	11,61
1992	36	9,50
1993	14	3,69
1994	24	6,33
1995	24	6,33
1996	10	2,64
1997	13	3,43
1998	20	5,28
1999	23	6,07
2000	24	6,33
2001	32	8,44
2002	23	6,07
2003	9	2,37
2004	5	1,32
2005	1	0,26
2006	8	2,11
2007	5	1,32
2008	1	0,26
2009	9	2,37
2010	6	1,58
2011	7	1,85
2012	12	3,17

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>.

La razón de la disminución en las acciones de DBC está vinculada con la presencia de grupos paramilitares que incursionaron en el territorio para el de 1999 con el Bloque Catatumbo actor armado ilegal que resto espacio a los grupos guerrilleros. La desmovilización de los grupos paramilitares puede ser la causa de un pequeño crecimiento en la tendencia en las acciones de DBC (tabla 5).

Tabla 5. Acciones de DBC por actor armado 1988-2012

ACTOR ARMADO	DAÑOS A BIENES CIVILES			
	ACCIONES	%	VICTIMAS FATALES	%
AGENTE EXTRANJERO	4	1,06		
EJÉRCITO NACIONAL	8	2,11	1	3,70
EJÉRCITO NACIONAL-FUERZA AÉREA	1	0,26		
EJÉRCITO NACIONAL-FARC	1	0,26		
FUERZA AÉREA	1	0,26		
FUERZA PÚBLICA	1	0,26		
GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO	18	4,75	4	14,81
GRUPOS PARAMILITARES	18	4,75	7	25,93
GUERRILLA NO IDENTIFICADA	64	16,89	5	18,52
GUERRILLA-CGSB	30	7,92		
GUERRILLA-ELN	159	41,95	5	18,52
GUERRILLA-ELN Y EPL	3	0,79	1	3,70
GUERRILLA-EPL	8	2,11		
GUERRILLA-ERP	1	0,26	1	3,70
GUERRILLA-FARC	56	14,78	3	11,11
GUERRILLA-FARC Y ELN	4	1,06		
POLICÍA NACIONAL	1	0,26		
POLICÍA NACIONAL-ELN	1	0,26		
TOTAL	379	100,00	27	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>

Es de anotar que 325 acciones de DBC fueron ejecutadas por grupos guerrilleros, cifra que representa el 85,75% de las acciones, así mismo las acciones de DBC más representativa fueron ataques a la infraestructura eléctrica con el 37,47 que representa 142 acciones, seguido de los medios de transporte con el 24,80% que representa 94 acciones y ataques a la vivienda y la propiedad privada con el 14,51%

con 55 acciones, tres objetivos recurrentes que suman 291 acciones que representan el 76,78% de las acciones totales (tabla 6).

Tabla 6. Frecuencia de DBC en el periodo 1988-2012

DAÑOS A BIENES CIVILES	CANTIDAD	%
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	142	37,47
MEDIOS DE TRANSPORTE	94	24,80
VIVIENDA Y PROPIEDAD PRIVADA	55	14,51
MATERIAL ELECTORAL Y SEDES POLITICAS	24	6,33
ENTIDADES PUBLICAS	16	4,22
INFRAESTRUCTURA VIAL	12	3,17
INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES	12	3,17
ENTIDADES BANCARIAS	11	2,90
INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL	6	1,58
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3	0,79
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1	0,26
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1	0,26
INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS PUBLICOS	1	0,26
LUGARES DE CULTO	1	0,26
TOTAL	379	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Obtenido de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>

3.2.3. Asesinatos Selectivos (MSEL)

Los asesinatos selectivos están presentes en todo en el periodo de estudio 1988-2012 destacando dos periodos, en los cuales se concentra los hechos siendo el primero; liderado por los grupos paramilitares durante los años 2000-2003 concentrando 43,74% de las acciones de violencia con 572 asesinatos. En un segundo momento toman relevancia los grupos emergentes o bandas criminales BACRIM previa desmovilización de los paramilitares del bloque Catatumbo. Con un 27,37% que representa 358 asesinatos (tabla 7). Aunado a lo anterior, (Villamizar, 2008) argumenta que la desmovilización de este bloque fue catalizador de la lucha por tierras que se darían posteriormente.

Tabla 7. Muertes selectivas en el periodo 1988-2012

AÑO	No.	MUERTES SELECTIVAS	%
	1308		
1988	12		0,92
1989	11		0,84
1990	21		1,61
1991	30		2,29
1992	25		1,91
1993	23		1,76
1994	38		2,91
1995	35		2,68
1996	33		2,52
1997	26		1,99
1998	17		1,30
1999	48		3,67
2000	153		11,70
2001	99		7,57
2002	136		10,40
2003	184		14,07
2004	36		2,75
2005	14		1,07
2006	9		0,69
2007	30		2,29
2008	31		2,37
2009	38		2,91
2010	69		5,28
2011	160		12,23
2012	30		2,29

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>.

Los paramilitares y grupos desconocidos delincuenciales son los principales actores en la ejecución de asesinatos selectivos que lesionan el capital social dado que son acciones dirigidas principalmente a líderes sociales (tabla 8).

Tabla 8. Acciones de MSEL por actor armado 1988-2012

GRUPO ARMADO	ACCIONES		VICTIMAS	
	Total	%	Total	%
GRUPOS ESTATALES	100	7,65	135	7,71
GRUPOS GUERRILLEROS	177	13,53	244	13,93
GRUPOS PARAMILITARES	506	38,69	666	38,01
GRUPOS DESCONOCIDOS	525	40,14	707	40,35
TOTAL	1308	100,00	1752	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. <http://www.centrodememorialhistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>.

3.2.4. Secuestro (SEC)

Los secuestros como acción cuyos móviles son económicos y seguidamente político, en el periodo 1988-2010 se presentan dos periodos representativos, el primero toma los años 1989-1992 con el 12,86% con 183 secuestros el cual coincide con una efervescencia de las guerrillas en el territorio con el ELN, EPL, FARC, M19 y la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en la búsqueda conjunta de negociaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco donde el M19 y el EPL se desmovilizan y la coordinadora guerrillera pierde impulso. El segundo periodo abarca 1996-2002 con un 62,75% con 893 secuestros siendo las guerrillas nuevamente el actor principal en la ejecución de acciones en un escenario nuevamente de negociaciones de paz esta vez entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana (tabla 9). Lo anterior marco un nuevo periodo en el que, “por un lado la pérdida de confianza entre las partes en conflicto dada la polarización de sus posiciones y, la necesidad de evitar un rompimiento definitivo del proceso de paz, que significaría el entierro forzoso de la Diplomacia por la paz y de la política exterior del presidente Pastrana” (Ramírez, 2002: 72).

Tabla 9. Acciones secuestros en el periodo 1988-2010

AÑO	No.	SECUESTROS	%
	1423		
1988	10		0,70
1989	35		2,46
1990	63		4,43
1991	36		2,53
1992	49		3,44
1993	8		0,56
1994	19		1,34
1995	13		0,91
1996	49		3,44
1997	77		5,41
1998	202		14,20
1999	230		16,16
2000	115		8,08
2001	171		12,02
2002	49		3,44
2003	41		2,88
2004	38		2,67
2005	33		2,32
2006	30		2,11
2007	23		1,62
2008	62		4,36
2009	38		2,67
2010	32		2,25

Fuente: Elaboración propia con datos tomado del entro Nacional de Memoria Histórica.

Los grupos Guerrilleros lideran las cifras con el 51,50% de secuestros equivalentes a 733 secuestros seguido de la delincuencia común y organizada que siguen un movimiento de sinergia marcado por las guerrillas con el 28,46% con 405 secuestros, la participación de los paramilitares en esta acción es muy reducida con el 8,64% o 123 secuestros (tabla 10).

Tabla 10. Acciones secuestros por actor armado 1988-2010

ACTOR ARMADO	SECUESTROS	
	ACCIONES	%
DESCONOCIDOS	159	11,17
AGENTES DE ESTADO-DAS	1	0,07
AGENTES DE ESTADO-EJÉRCITO	1	0,07
AGENTES DE ESTADO-POLICÍA	1	0,07
GUERRILLA CONJUNTA	5	0,35
GUERRILLA NO IDENTIFICADA	8	0,56
GUERRILLA-DISIDENCIA ELN	1	0,07
GUERRILLA-ELN	550	38,65
GUERRILLA-EPL	5	0,35
GUERRILLA-FARC	163	11,45
GUERRILLA-M19	1	0,07
DELINCUENCIA COMÚN	171	12,02
DELINCUENCIA ORGANIZADA	234	16,44
GRUPOS PARAMILITARES	123	8,64
TOTAL	1423	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>

3.2.5. Atentados Terroristas (AT)

Los atentados terroristas (AT) en cifras son poco significativas como se aprecia en el cuadro 6, ya que se registraron 5 AT durante el periodo 1988-2012 acciones de violencia ejecutadas en un 100% por los grupos guerrilleros del ELN con 2 acciones y las FARC con 3 acciones, aunque las cifras son bajas se perdieron 4 vidas en los hechos acontecidos razón que da importancia a este tipo de violencia.

3.2.6. Minas Antipersona (MAP)

Las minas antipersona (MAP) son utilizadas mayormente en el sector rural con un 97,93% que equivale a 709 acciones realizadas durante el periodo de referencia y con tan solo un 2,07% en el sector urbano que equivale a 15 acciones, entiendo como acción la mina que detona y causa daños medibles en pérdidas de vida y heridos durante el periodo 1988-2012 (tabla 11).

Tabla 11. cifras de las minas antipersona en el periodo 1988-2012

	ACCIONES	724
	HERIDOS	557
MINAS ANTIPERSONA	VICTIMAS FATALES	167
	SECTOR URBANO	15
	SECTOR RURAL	709

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponibles en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>

Existe una relación evidente en el uso de las minas antipersona y el narcotráfico (Domínguez, 2010) dado que permite el control del territorio y facilita la siembra de cultivos ilícitos, su procesamiento así como distribución, punto en el cual los campos minados sirven para proteger posiciones y corredores estratégicos además de ser un obstáculo para la erradicación manual; realidad que se afirma al realizar un seguimiento de las 724 acciones de MAP donde resultaron víctimas fatales y heridos, las cuales han crecido sostenidamente a partir del año 2000 al 2006 como pico máximo del periodo estudiado con el 16,99% de las acciones y disminuyendo a partir de este año al 4,97% de las acciones en el 2012 (tabla 12).

Tabla 12. Acciones con MAP en el periodo 1988-2012

AÑO	No.	MINAS ANTIPERSONA	%
	724		
1988	0		0,00
1989	0		0,00
1990	0		0,00
1991	0		0,00
1992	2		0,28
1993	0		0,00
1994	1		0,14
1995	0		0,00
1996	3		0,41
1997	2		0,28
1998	0		0,00
1999	2		0,28
2000	11		1,52
2001	21		2,90
2002	63		8,70
2003	51		7,04
2004	31		4,28
2005	95		13,12
2006	123		16,99
2007	67		9,25
2008	62		8,56
2009	70		9,67
2010	47		6,49
2011	37		5,11
2012	36		4,97

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>.

Es evidenciable que el periodo 2000 al 2012 representa más del 95,00% de las acciones, lo cual responde a las lógicas de uso de las MAP, dado que en

1999 los grupos paramilitares incursionan en el escenario con el bloque Catatumbo (valencias Grajales, 2016) e inician disputas y confrontaciones armadas al norte del departamento en la zona del Catatumbo, donde el territorio y el negocio del narcotráfico era dominado por las guerrillas del ELN, EPL y FARC.

Para el año 2006 los grupos paramilitares abandonan la zona tras la realización de procesos de desmovilización, razón que explica la disminución de acciones causadas por MAP. Una realidad que agrava la situación es que no todas las acciones son causadas por MAP puesto que tiene un costo representativo en su compra y en la logística para llevarlas a los lugares a los cuales los grupos irregulares las requieren. Por este motivo los grupos armados ilegales fabrican artefactos explosivos improvisados (AEI), los cuales representan un mayor peligro por ser difíciles de ubicar por los elementos utilizados en su fabricación además de ser más inestables. Para el año 2010 las guerrillas del ELN y el EPL cuya presencia es de vieja data en el departamento Norte de Santander, son los grupos irregulares que mayor uso hacían de MAP y AEI.

3.2.7. Masacre (MAS)

Las masacres están presentes en casi todo el periodo de estudio 1988-2012 exceptuando cuatro años en los cuales no ocurren masacres, en una tendencia creciente desde 1992-2002 con una variación en el de 1997 año a partir del cual se agudiza las cifras con la entrada de los paramilitares con el bloque Catatumbo con el 61,67% de las acciones con 74 masacres. A partir del 2002 la cantidad de masacres baja sensiblemente y con la desmovilización del bloque Catatumbo en el 2004 da un periodo de cero (0) acciones durante los años 2006-2008. Luego de estos años de calma se presentan nuevamente acciones de masacres durante el 2009-2011 (tabla 13).

Tabla 13. Acciones de masacres en el periodo 1988-2012

AÑO	No.	MASACRES	%
	120		
1988	1		0,83
1989	3		2,50
1990	3		2,50
1991	1		0,83
1992	2		1,67
1993	3		2,50
1994	3		2,50
1995	5		4,17
1996	7		5,83
1997	3		2,50
1998	7		5,83
1999	15		12,50
2000	14		11,67
2001	18		15,00
2002	20		16,67
2003	4		3,33
2004	6		5,00
2005	1		0,83
2006	0		0,00
2007	0		0,00
2008	0		0,00
2009	1		0,83
2010	2		1,67
2011	1		0,83
2012	0		0,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informe-General/basesDatos.html>

Los paramilitares son los principales actores armados ilegales en la ejecución de masacres con 56,67% acciones que dejó el 59,92% de las víctimas desarrolladas entre 1998 y 2002, Seguidos de la de las guerrillas con el 19,17% de las masacres

ejecutadas de las que sobresale el ELN con el 9,17% de las acciones. Lo anterior siguiendo la tendencia encontrada por (Ávila, 2019) en la que, la estrategia de campo arrasado llevada a cabo por paramilitares, consistía en masacres a la población y homicidios ejemplarizantes más que todo en la zona norte del país.

Tabla 14. Acciones masacres por actor armado 1988-2012

ACTOR ARMADO	MASACRES			
	ACCIONES	%	VICTIMAS	%
AGENTE EXTRANJERO-GUARDIA NACIONAL VENEZOLANA	1	0,83	4	0,55%
FUERZA PÚBLICA-EJÉRCITO NACIONAL	5	4,17	23	3,17
FUERZA PÚBLICA-POLICÍA NACIONAL	1	0,83	7	0,96
GRUPO ARMADO NO IDENTIFICADO	22	18,33	103	14,19
GRUPOS PARAMILITARES	68	56,67	435	59,92
GUERRILLA CONJUNTA-FARC Y ELN	2	1,67	10	1,38
GUERRILLA-ELN	11	9,17	50	6,89
GUERRILLA-EPL	1	0,83	7	0,96
GUERRILLA-FARC	9	7,50	87	11,98
TOTAL, GENERAL	120	100,00	726	100,00

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>

Conclusiones

Consultando el informe “Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca 2012” realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito” expone quince (15) municipios del departamento Norte de Santander con cultivos de coca para el año 2012 y al cruzar la información de acciones violentas con dichos municipios el resultado se aprecia en la tabla 15.

Tabla 15. Acciones de violencia cultivos ilícitos y frontera

NO.	MUNICIPIOS	FORMAS DE VIOLENCIA							TOTAL
		AP	AT	DBC	MAP	MSEL	MAS	SEC	
40	MUNICIPIOS DE NORTE DE SANTANDER %	54	5	379	724	1308	120	1423	4013
		1,35	0,12	9,44	18,04	32,59	2,99	35,46	100,00
25	MUNICIPIOS SIN COCA	20	0	66	42	231	14	260	633
15	MUNICIPIOS CON COCA	34	5	313	682	1077	106	1163	3380
10	MUNICIPIOS FRONTERIZOS	13	4	223	388	864	80	598	2170
25	MUNICIPIOS SIN COCA %	37,04	0,00	17,41	5,80	17,66	11,67	18,27	15,77
15	MUNICIPIOS CON COCA %	62,96	100,00	82,59	94,20	82,34	88,33	81,73	84,23
10	MUNICIPIOS FRONTERIZOS %	24,07	80,00	58,84	53,59	66,06	66,67	42,02	54,07

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>

La distribución de los hechos de violencia sobre el territorio da luces sobre los intereses que definen los patrones de conducta de los grupos armados ilegales, que mediante el terror y la violencia convierten la supervivencia en el único objetivo y las condiciones dignificantes del ser humano; se pierden poblaciones enteras que son sometidas bajo su presencia.

Es apreciable como los 7 hechos de violencia estudiados en el periodo 1988-2012 se extienden sobre todo el departamento, así mismo es evidente la concentración en los municipios ubicados al norte sobre la línea fronteriza, siendo el narcotráfico el elemento que cohesiona los hechos violentos sobre el territorio. Como se resalta en la cartográfica, los 15 municipios con cultivos ilícitos concentran más acciones violentas con el 62,96% de los Ataques a Poblaciones, el 100,00 % de los Atentados Terroristas, el 82,59% de los Daños a Bienes Civiles, el 94,20% de las Minas Anti-Persona, el 82,34% de las Muertes Selectivas, el 88,33% de las Masacres y el 81,73% de los secuestros; en total los municipios con cultivos ilícitos concentran el 84,23% de las acciones violentas sobre el territorio.

En un segundo grupo están los 10 municipios fronterizos los cuales concentran acciones violentas con el 24,07% de los Ataques a Poblaciones, el

80,00% de los Atentados Terroristas, el 58,84% de los Daños a Bienes Civiles, el 53,59% de las Minas Anti-Persona, el 66,06% de las Muertes Selectivas, el 66,67% de las Masacres y el 42,02% de los secuestros; en total los municipios fronterizos concentran el 54,07%. En contraste con los 25 municipios en los cuales para el año 2012 no tenían cultivos ilícitos acumulando cifras mucho menores con un 15,77% del total de las acciones. Destacando el municipio de La Playa en el cual no figuran cultivos ilícitos (C. M. D. C. 2012) pero geográficamente esta incrustado alrededor de municipios en los cuales existen cultivos ilícitos. En resumen, los municipios con cultivos ilícitos concentran el 84.23% de las acciones violentas, los municipios sin cultivos ilícitos concentran el 15,77% de las acciones, además del narcotráfico, la condición de frontera es otra realidad que concentra intereses y por ende la violencia sobre el territorio y al observar con dicho criterio los 10 municipios fronterizos los cuales acumulan el 54,07% de las acciones violentas (tabla 16).

Tabla 16. Municipios con cultivos ilícitos y municipios fronterizos

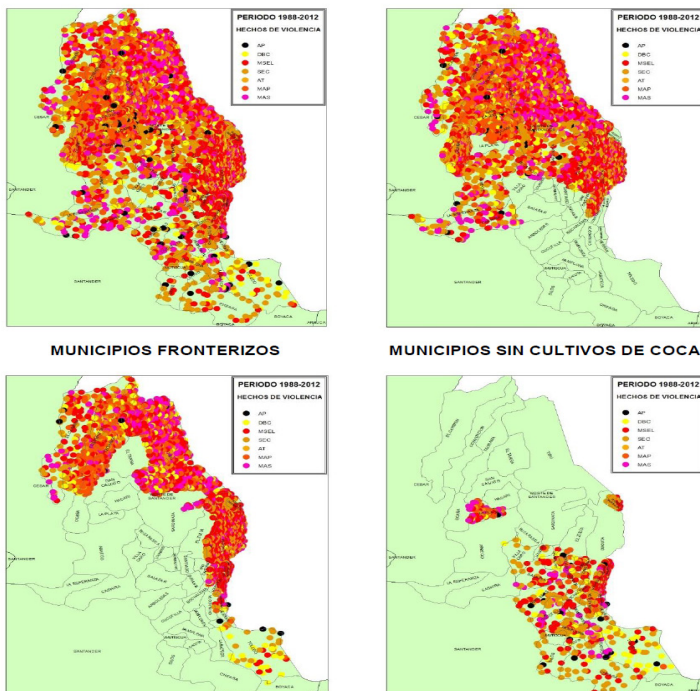
No.	MUNICIPIOS CON CULTIVOS DE COCA	No.	MUNICIPIOS FRONTERIZOS
1	ABREGO	1	CONVENCION
2	BUCARASICA	2	CUCUTA
3	CACHIRA	3	EL CARMEN
4	CONVENCION	4	HERRAN
5	CUCUTA	5	PUERTO SANTANDER
6	EL CARMEN	6	RAGONVALIA
7	EL TARRA	7	TEORAMA
8	EL ZULIA	8	TIBU
9	HACARI	9	TOLEDO
10	LA ESPERANZA	10	VILLA DEL ROSARIO
11	OCAÑA		
12	SAN CALIXTO		
13	SARDINATA		
14	TEORAMA		
15	TIBU		

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2013. Disponible en <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>.

En un análisis de incidencia en el conflicto armado las guerrillas impactan la infraestructura física causando muerte en dichas acciones además de profundizar el desarrollo económico aumentando el daño colateralmente en el tiempo. La guerrilla

en su accionar busca reconocimiento enfrentando la fuerza pública lo que conlleva su actuar más cerca del casco urbano. Por el contrario, los paramilitares no impactan la infraestructura física, ni buscan enfrentarse con la fuerza pública dado que en el periodo de estudio 1988-2012 no se registran combates. Pero la violencia ejercida sobre la vida con la ejecución de muertes selectivas y masacres es definitiva, acciones que son cometidas principalmente en la zona rural dispersa donde evita enfrentar la fuerza pública además de ser la ubicación de los cultivos ilícitos (figura 1). Lo anterior lo argumenta Huhle (2001: 70) pues “en lo militar, la estrategia paramilitar se centra en la población civil, no en la confrontación directa con la guerrilla. Para Castaño, todo campesino que ha colaborado una vez con la guerrilla, es enemigo militar y por lo tanto objeto de agresiones mortales, de desplazamiento forzoso y de otros tipos de persecución.”

Figura 1. Cartografía de la violencia determinada por la presencia de cultivos ilícitos y la frontera



Fuente: Elaboración propia con datos tomado del Centro Nacional de Memoria Histórica. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html>

Es claro que los cultivos ilícitos se constituyen en la principal fuente de ingresos de los actores armados ilegales, es por ello que en los municipios con presencia de dichos cultivos se ha vivido con mayor intensidad la confrontación armada; por otra parte, los municipios del departamento que estén en promedio a 2.800 metros sobre el nivel del mar (no aptos para cultivos de coca que se da sobre los 1000m.) carecen de estimación para los actores ilegales lo que les ha permitido vivir con cierta pasividad la confrontación armada lo que se refleja en la frontera sur del departamento con Venezuela la cual aun en su condición de frontera se vive en relativa paz.

Referencias

- Ávila, A. (2019). *Detrás de la guerra en Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana.
- Ávila, F., León, S., & Ascanio, E. N. (2013). *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Colombia: Penguin Random House Grupo Editorial.
- BBC. (2016). América Latina. Redacción. Ejemplar 1 de diciembre de 2016 Cuáles son los 6 países de América Latina que están entre los 13 con peores índices de criminalidad en el mundo. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437>.
- Carreño Barreto, R. (2016). Capital social y conflicto armado: una indagación en diferentes municipios de Colombia sobre la resiliencia social ante la violencia. (*tesis de maestría*). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Contreras, M. H. J. (2003). El conflicto armado en Colombia. *Revista de derecho*, (19), 119-125.
- Cortés, P. M. (2012). Tendencias de acumulación, violencia y desposesión en la región del Catatumbo. *Ciencia política*, 7(13), 113-149.
- Chabat, J. (2010). El Estado y el crimen organizado transnacional. *Revista de Historia Internacional*, 3-14.
- de Coca, C. M. D. C. (2012). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, Bogotá. Obtenido de https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2012_web.pdf.

- González, f. E. (2004). Rev Accord, 2004 - insumisos.com. Obtenido de Conflicto violento en Colombia: Una perspectiva de largo plazo. https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Conflicto%20violento%20en%20Colombia_perspetiva%20de%20largo%20plazo.pdf.
- Hernández, C. L. (2016). *¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué?* Bogotá: Debate.
- Huhle, R. (2001). La violencia paramilitar en Colombia: Historia, estructuras, políticas del Estado e impacto político. *Revista del CESLA. International Latin American Studies Review*, 2, 63-81.
- López, C., & García, A. (1999). Los costos ocultos de la paz en Colombia. *Ensayos sobre Paz y Desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional*, 81-177.
- López Rojas, M. C. (2007). Efectos de la regionalización de la política de seguridad democrática para el desplazamiento en las fronteras de Colombia. *Colombia internacional*, (65), 136-151.
- Martínez Ortiz, A. (2001). Análisis económico de la violencia en Colombia. Una nota sobre la literatura. *Cuadernos de economía*, 20(34), 157-187.
- Miranda, M. D. J. Z., & Arévalo, J. L. R. (2014). Análisis del conflicto armado y su impacto en la baja producción agraria en la región del Catatumbo para el periodo 1998-2011”, caso: Tibú, Hacarí, el tarra y teorema (nortesantander). *Heurística: revista digital de historia de la educación*, (17), 83-101.
- Miranda, M. D. J. Z., López, D. J. M., Ramírez, J. A. C., & Alvarado, W. A. G. (2016). Determinantes del desplazamiento forzoso en Norte de Santander 2008-2013. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 8(1), 23-32.
- Montenegro, N. F. G. (2016). Establecimiento de la agroindustria palmera en la región del Catatumbo, Norte de Santander (1999-2010). *Ciencia Política*, 11(21), 93-124.
- Oszlak, O. (1992). Estado y sociedad: las nuevas fronteras. En Kliksberg Bernardo (comp.) (1994): *El Rediseño del Perfil del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica, México.
- Posada Díaz, F. (1968). *Colombia: violencia y subdesarrollo*. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Posada, A. R. (1987). La violencia y el problema agrario en Colombia. *Análisis político*, (2), 30-46.

- Ramírez, A. M. (2002). Diplomacia por la paz: La implementación de la política exterior en Colombia desde el proceso de paz. *Con-texto*, 13, 69-73.
- Ríos sierra, J. (2016). La periferalización del conflicto armado colombiano (2002-2014). *Revista de Estudios sobre Espacio y Poder*, 7(2), 251-275.
- Rivera Pabón, J. A. (2006). El papel de la geografía en el estudio de la relación sociedad-naturaleza. *Revista Luna Azul*, 23, 23-27.
- Rubio, M., & Francisco, G. S. (1999). Crimen e impunidad: Precisiones sobre la violencia. *Historia y Sociedad*, 6, 225-233.
- Salazar, L. G. (2010). Corredores y territorios estratégicos del conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los actores armados. *Perspectiva Geográfica*, 15, 9-36.
- Sánchez Torres, F., & Núñez, J. (2001). Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: El caso de Colombia. *Coyuntura Económica*, 92-116.
- Trejos, L. (2012). La violencia política como elemento transversal en la configuración del Estado colombiano. *Persona y sociedad*, 26(3), 33-52.
- Uribe Kaffure, S. (2014). Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. Aproximación desde un estudio de caso. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 16(1), 245-287.
- Villamizar Moreno, A. (2008). Desmovilización del bloque Catatumbo-nuevo conflicto de tierras. (*tesis de pregrado*). Colombia: Universidad de los Andes.
- Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. *Revista CS*, (8), 187-208.